

**LO QUE PUEDE SUCEDER
EN EL ECUADOR
EL EFECTO NEOLIBERAL
EN CHILE
1983**

Manuel Pérez

CRISIS NACIONAL Y EXPECTATIVAS

Hay evidencias, cada día mayores, que la dictadura ha entrado en su ocaso, y que el pueblo ha empezado una masiva y activa resistencia. Este, en medio de una profunda crisis social, institucional y económica, enfrenta, por un lado, nuevas escaladas represivas y de crueldad social con que se defiende la dictadura; y, por otro, se prepara para llevar adelante el retorno a la Democracia.

Se ha empezado a transitar el complejo y difícil camino de derrocar la dictadura y de construir un nuevo orden político y constitucional. Es imposible, aún, preveer las formas que tomará este proceso histórico; ellas serán el resultado, entre otros, de elementos esenciales que concatenadamente están en desarrollo. Con el propósito de apreciar algunos de esos elementos y de percibir parte de la ingente tarea a realizar, se presenta a continuación una síntesis de la situación social y económica a fines del primer semestre de 1983 y de sus expectativas, bajo los siguientes puntos:

El amplio espectro de la crisis nacional

Los efectos familiares de la crisis

Cisma e inseguridad sociales

El control social

La crisis económica y sus expectativas

La crisis de la política económica

Las expectativas de la política económica

Situación sin salida

La escalada represiva

La reacción de la sociedad civil

Las reivindicaciones inmediatas.

Dos hechos sustantivos y trascendentes para la dictadura y para el porvenir del país, se han configurado en el curso del año pasado y en el primer semestre de 1983. Por un lado, se quebró el modelo económico instrumentalizado por el autoritarismo, dando paso a una profunda crisis de la economía y de la política económica, que no le ha dejado opción para reconstruir o formular una nueva política. Por otro lado, la reacción de la sociedad civil está cuestionando abiertamente la presencia de la figura central de la dictadura, sus propósitos de mantenerse como tal hasta 1991 y de hacer funcionar la actual constitución autoritaria para la sucesión del poder. Con ello se ha roto el esquema político—institucional del régimen, que era su otra base de sustentación. Ahora, sólo le queda enfrentar a la sociedad civil con la represión.

El Amplio Espectro de la Crisis Nacional

Nunca ha ocurrido en la historia de Chile un proceso destructivo tan profundo de la vida y estructuras nacionales como el que está acaeciendo bajo la dictadura de las fuerzas armadas y policiales. De hecho, todas las clases sociales, los sectores económicos y estructuras institucionales están profundamente dañados. La dictadura al destruir la Democracia se propuso establecer otro orden económico, social, político e institucional; pero después de un decenio es evidente que no ha resuelto ninguno de los grandes problemas nacionales; por el contrario, se han agravado extremadamente, incluyendo la propia estructura y funcionamiento de las Fuerzas Armadas y Policiales.

Chile es hoy un país más pobre y dependiente que hace diez años; la pobreza se ha extendido por amplios sectores sociales, incluyendo a la clase media. Su endeudamiento externo y sometimiento al capital foráneo es mayor; su potencial productivo y de desarrollo está destruido; sus fuentes de trabajo aniquiladas, y su desintegración social es impresionante.

Sus servicios sociales han sido desmantelados; su estructura institucional anarquizada y su régimen de derecho ha sido sustituido por un régimen arbitrario.

La actual crisis nacional no es una depresión económica de carácter transitorio, como la dictadura trata de presentarla; tampoco puede achacarse a los efectos de la crisis mundial de estos últimos años. Lo que está sucediendo es una crisis provocada por el carácter y dirección de las políticas de la dictadura. Además de económica y política, es una crisis moral y de orientación de la vida nacional, que está resquebrajando profundamente la convivencia social.

La dictadura ha perdido, a causa de la crisis económica, la aceptación que tenía en los sectores sociales civiles que se beneficiaban con su política y que, por lo mismo, la justificaban. Al quebrarse el modelo que pretendió imponer, su política económica ha quedado sin justificación y sin orientación alguna, en tanto que la situación general es de un empobrecimiento creciente y sin esperanzas de todas las capas sociales, que no tienen opción de resolverse dentro de la dictadura.

Los estratos más pobres de la población han sido, sin dudas, desde el inicio de aquella, los sectores más golpeados; han sufrido de una constante desocupación, de inestabilidad en el empleo y de la baja de sus ingresos, además de la pérdida de los beneficios sociales y de los derechos laborales. Estas condiciones impuestas por la dictadura han jugado un doble papel; por una parte, han sido el medio para transferir ingresos al sector empresarial; y, por otra, han hecho más eficaz la represión. Si el año de 1975 fue duro para los estratos populares, los dos últimos y este de 1983 han sido aún peores, al agravarse como nunca los problemas del empleo y de las remuneraciones.

A lo largo del decenio la marginación se ha hecho cada vez mayor, hasta llegar ahora a estratos que aparecían como los privilegiados por el modelo económico y social impuesto. Esta es la consecuencia más inmediata de la concentración económica inducida por dicho modelo y por la falta de sensibilidad social que ha tenido la política aplicada.

A la apremiante situación de los sectores populares, se ha sumado el creciente deterioro en que han entrado los estratos de la clase media, que de alguna u otra manera, habían sido menos afectados y hasta algunos se habían beneficiado con el modelo de la dictadura, acomodándose, por

cierto, a los cambios y orientaciones introducidos por las políticas de aquélla en la economía, en los servicios sociales, en los campos institucional, deportivo, recreacional y otros. Hoy, estos son estratos endeudados, golpeados por la desocupación y la pérdida de ingresos, que están sufriendo la caída de su standard de vida y de sus expectativas.

Por otro lado, ha emergido una situación de bancarrota entre los sectores del empresariado, con excepción de los grupos económicos. Dichos sectores, que aparecían como los más privilegiados de la dictadura, en los últimos años vienen siendo expropiados por los grupos económicos, sin que dentro del régimen de la dictadura haya forma de evitarlo.

Los Efectos Familiares de la Crisis

Los problemas aludidos adquieren conmovedoras consecuencias al nivel familiar de los diferentes sectores sociales. No hay familia popular ni de la clase media, e incluso de los empresarios no cobijados en los grupos económicos, que no tengan un problema importante sin resolver. La política de la dictadura encareció extraordinariamente la alimentación, el transporte, la medicina y la educación. A Chile se lo transformó en un país de precios altos como si fuera industrializado; pero se le mantuvo con remuneraciones e ingresos bajos, propios de un país subdesarrollado. Los sueldos y salarios han sido reducidos en su valor nominal, a lo que se suma la erosión del poder adquisitivo que provoca la inflación. El problema del pueblo y de las clases medias y también de los empresarios empobrecidos, es cómo alimentar y medicinar su familia, cómo costear el transporte diario y cómo financiar la educación de los niños y jóvenes.

Además de la gravísima situación de los sectores populares que se ven obligados a privarse de las cosas más elementales, los estratos medios han entrado a comprimir y hasta eliminar los gastos no estrictamente necesarios (gastos recreacionales, culturales, viajes, etc.), así como autoracionalizarse el agua, el servicio telefónico, los combustibles, la luz, etc. También están reduciendo sus comodidades habitacionales hogareñas; entre estas familias también ha aparecido la figura del "allegado" y el hacinamiento típico de los sectores populares. Las familias de nivel medio han perdido de la noche a la mañana parte importante o todos sus ahorros a causa de la quiebra de bancos y financieras; están deshaciéndose de sus propiedades y quedando sin previsión social. Se derrumbaron, por otro lado, sus expectativas; hoy no tienen opción de conseguir el ambicionado departamento o la casa

propia ni el auto, de la misma manera que no tienen posibilidades de progresar en el mundo del trabajo o en el campo profesional ni de mejorar sus condiciones de vida. Pero lo que más conmueve es el hecho insólito que los padres de estas familias están renunciando a la educación de sus hijos y admitiendo de hecho que éstos tengan un porvenir con menos posibilidades que las que ellos tuvieron en el Chile democrático.

En los sectores empresariales, la situación no es menos dramática. Estos presencian y viven la destrucción de la clase empresarial tanto en sus estratos pequeños y medianos como también en los altos. En esta clase abundan los empresarios arruinados sin esperanzas de recuperarse, o a punto de quebrar, liquidando sus propiedades, metidos en complicados sistemas de financiamiento que cada vez les hundan más. Se cuentan por miles los empresarios con juicios por estafas o contratos incumplidos, encarcelados y prófugos de la justicia. Cada día aumentan las familias de empresarios empobrecidos, frustrados en las esperanzas que pusieron en el gobierno; sintiéndose engañados, pues realizaron operaciones basados en la palabra del gobierno que no devaluaría, y en la seguridad que se les decía que tenía el sistema de ahorro. Ahora, decepcionados y amargados ven a diario como los grupos económicos —cada vez más reducidos— les arrebatan sus propiedades con el apoyo y protección de la dictadura.

Los sectores del agro se debaten en tremendos problemas sin apoyo ninguno del Gobierno; esto es, sin crédito subsidiado, que siempre ha necesitado la agricultura chilena; sin asistencia técnica alguna; sin precios garantizados, enfrentando la competencia de las importaciones, los altos costos financieros y los elevados precios de los insumos. Sembraron con unas expectativas de precio y al cosechar se encuentran con precios más bajos que el año anterior, impuestos por el sistema de comercialización dominado por los grupos económicos. En los últimos dos años, en varios cultivos, no se ha levantado la cosecha. Estos sectores, se ven, por un lado, tratados con desprecio y amenazas por las autoridades; y, por otro, deben enfrentar, dentro de las condiciones económicas señaladas, el costo de pesadas hipotecas, que a diario originan remates y abandonos de tierras. En estas circunstancias se han paralizado las inversiones en el campo, ha cundido la inestabilidad de la producción y hasta de la propiedad. Para el empresario agrario, parte del cual apareció como tal después de septiembre de 1973 al tenor de la devolución de las tierras de la reforma agraria o de la venta barata de tierras que el gobierno hizo a sus partidarios, lo que fue una esperanza se ha transformado en un desengaño, al tiempo que ven destruídas sus empresas y que sus tierras e inversiones pasan a los bancos y a los grupos económicos. Si esta es la situación del empresariado, más gra-

ve es aún la situación de los pequeños propietarios y aparceros, los cuales están en la ruina constituyendo un estrato expropiado y empobrecido, sin que el régimen le ofrezca opciones de ninguna clase.

En el aspecto estrictamente económico, las familias militares, de policías y del personal de alto nivel del Gobierno y del poder judicial, así como la de los hombres de los grupos económicos y de las finanzas, contrasta, por cierto, con la imagen de los sectores comentados. Estas familias tienen buenas condiciones económicas y un buen pasar; hoy poseen más bienes e ingresos que antes; ocupan las posiciones sociales y políticas más encumbradas, al mismo tiempo que gozan de excepcionales privilegios.

Pero en un régimen en que la arbitrariedad es la norma, como ocurre en toda dictadura y en particular en la chilena que ha sido tan groseramente autoritaria y desafiante, las contradicciones sociales que desata, trascienden, naturalmente, hasta la vida familiar de los estratos gobernantes, especialmente cuando el régimen entra en crisis.

Por lo dicho, no obstante las buenas condiciones económicas de las familias de los hombres del régimen, estas llevan la procesión por dentro; su vida se desenvuelve en un cuadro de tremendas incertidumbres y de conflictos latentes y potenciales. Son sectores cuyas familias mantienen, en general, malas relaciones; viven en un medio lleno de rivalidades y suspicacias. Hacia el interior de los grupos familiares se desarrollan problemas que van desde la infidelidad manifiesta hasta conflictos con los hijos, ya sea por la vida disipada de éstos o porque se rebelan y rechazan el actual estado de cosas. Como en toda sociedad, en la chilena estas situaciones siempre han ocurrido; lo singular de ahora es, por un lado, la frecuencia con que suceden y, por otro, la trascendencia que tiene la descomposición familiar y moral de los grupos que copan el poder.

Muchos jefes de familia de dichos grupos, de una manera u otra están metidos en dificultades por negocios relacionados con las autoridades de la dictadura; a menudo esos negocios les causa rivalidades y no siempre son claros. Por estas circunstancias y por la rigurosa y ostentosa aplicación que se hace de las jerarquías, las familias de militares y policías están bajo un gran sometimiento, al mismo tiempo que viven atemorizados por la crisis económica, social y de la política gubernamental, así como por el porvenir de la dictadura. Intuyen que nada tienen seguro, y no saben de donde puede venirles el golpe, si desde dentro del propio régimen y de sus amigos, o desde fuera. Por más altanería que quieran lucir, tienen conciencia

de la destrucción del país por la dictadura y de la acumulación de presiones sociales. No todos llegan a comprender qué pasó ni cómo llegaron al punto sin retorno en que se encuentran. Se han transformado en familias despreciadas y temidas por la sociedad civil; en donde hay un militar o familiar próximo de éstos o un hombre del gobierno o funcionario de alto nivel o un personero de los grupos económicos, hay un riesgo para los civiles. Aquellos pueden informar lo que se conversa, lo que se lee, lo que se estudia, lo que se hace; de las amistades o relaciones que se tienen. Con ellos se corre hasta el riesgo de la extorsión; pero, por otra parte, ellos mismos tratan de relacionarse lo menos posible con el resto de la población. Le temen a la propia dictadura, a sus jefes superiores; se cuidan de verse envueltos en problemas con civiles; están a la expectativa de que puedan ser moralmente ofendidos, y evitan saber cosas que no les conviene. Así resultan cada día más aislados, con lo que se está produciendo un profundo distanciamiento entre la sociedad civil y las familias de militares y de los círculos privilegiados que les rodean.

A pesar de sus privilegios, entre ellos también hay familias perjudicadas por la pérdida de sus ahorros, por la quiebra de empresas, por la inflación y altos costos de vida; esto, en especial, al nivel de las familias de los militares y policías de tropas y de mandos medios. Además, también, de una u otra forma, les golpea la situación de sus parientes civiles más cercanos. Sus ventajas más inmediatas provienen de las remuneraciones y beneficios que tienen, pero sobre los cuales pesa el riesgo que de un momento a otro podrían deteriorarse siguiendo la suerte del resto de la sociedad.

Cisma e Inseguridad Social

La crisis general que ha desatado la dictadura está dando lugar a una profunda división social, prácticamente imposible de zanjar mientras aquella perdure. Se ha conformado así un cuadro de complejos antagonismos, en que se ve como la masa de la población civil con sus problemas se contrasta con la situación de las familias cuyo jefe de hogar es un militar o policía activo o en retiro; por otro lado, están los empresarios marginados de los grupos económicos frente a los empresarios que constituyen dichos grupos; la masa de los trabajadores de los sectores público y privado frente a los funcionarios de alto nivel de los organismos públicos y de las empresas; los campesinos y empresarios agrícolas frente a los que se apropian de sus tierras y de su producción; y hasta se puede percibir separación entre las familias de los militares y policías de tropa y de mandos bajos, y de los

altos mandos. Estos grupos sociales se enfrentan unos a otros no por diferencias ideológicas ni por apreciaciones acerca de la situación general del país; sino por razones pragmáticas derivadas de los problemas que afectan a los grupos mayoritarios y de sus negras perspectivas. Estos cotidianamente contrastan sus posiciones con la de los grupos minoritarios, a los cuales, se les identifica como los grandes beneficiados de la dictadura y como los responsables de la crisis nacional.

Nunca en la historia de Chile, ni siquiera en la Guerra Civil de 1891 ni en la dictadura de Ibáñez en 1927—1931, se había producido un deterioro tan grande de la integridad social. Tampoco es fácil encontrar en la historia moderna tanta falta de responsabilidad cívica, de sentido político y del arte de gobernar como la que muestra la dictadura y de quienes adentro del país y desde el exterior la apoyan y sostienen, al provocar este profundo resquebrajamiento social, de proyecciones insospechadas. Esta es una de las mayores insensateces, que todo gobernante con un mínimo de cordura y de responsabilidad trata de evitar.

Al panorama anterior se está agregando un nuevo elemento, como es el desarrollo de una delincuencia mayor y sus relaciones con otros elementos del sistema. En este aspecto, la dictadura pretende lucir una doble cara. Con el pretexto de combatir la delincuencia común hace frecuentes operativos de allanamiento a las poblaciones marginales de Santiago y de las grandes ciudades de provincias. Sin embargo, el verdadero propósito de esos operativos son la represión y el atemorizamiento de dichas poblaciones. El problema y alcances de la delincuencia mayor es otro. En condiciones de una desocupación amplia y prolongada, de fuerte reducción de los ingresos, de altos precios y de la imposibilidad de satisfacer un consumo familiar mínimo, como ocurre actualmente, al mismo tiempo que, por otro lado, se estimula el consumismo y se ostenta la riqueza, se produce una difusión de la delincuencia urbana, del tráfico de drogas y del contrabando, actividades que dan lugar a la formación de mafias capaces de realizar delitos de mayor magnitud como asaltos de bancos, a casas comerciales, a residencias de familias ricas, y de practicar raptos y extorsiones y de participar en negocios ilegales de consideración.

A este tipo de delincuencia mayor se suman grupos paramilitares vinculados al régimen, entre los cuales se establecen vínculos y normas de convivencia, que permite a tales grupos emplear a la delincuencia para ejecutar parte de su trabajo sucio, y a ésta protegerse y actuar más libremente. La delincuencia protegida se transforma en una actividad altamente lucrativa,

capaz de operar negocios y movilizar recursos de magnitud, lo que la hace atractiva para funcionarios policiales, de seguridad y judiciales que dada la amplia discrecionalidad que les permite al régimen, fácilmente se corrompen al precio de brindar seguridad y colaboración a los delincuentes y a sus organizaciones. Se forma así, por un lado, un clima de impunidad; y, por otro, una condición de desamparo o de indefección de la sociedad civil. Ante esta situación, las familias ricas recurren a contratar servicios privados de policía, que por lo general están ligados a los grupos paramilitares o la delincuencia mayor o a la policía estatal o a los servicios de seguridad.

Es frecuente, además, que la policía o los servicios de seguridad interior de los países hagan uso de delincuentes y de sus organizaciones para agredir a políticos civiles, a dirigentes sindicales o de pobladores, o para causar daño a sus familiares; para reprimir manifestaciones, interrumpir reuniones o para provocar a grupos de población civil. Estas relaciones y condiciones, dan margen a una delincuencia que se desenvuelve con relativa impunidad y que, por lo mismo, se hace agresiva, mientras por otro lado, cunde la corrupción de los servicios policiales, de seguridad interna y judiciales, creándose un medio de gran inseguridad civil.

Dentro de esta atmósfera han ocurrido hechos de suma gravedad que no han sido suficientemente aclarados por las autoridades del régimen. Entre otros, está la muerte del dirigente gremial Tucape Jiméñez, aún no resuelta; los crímenes de Viña del Mar de los cuales los servicios de inteligencia civil acusaron a un acaudalado hombre de negocios, pero que la justicia liberó de culpa acusando a una pareja de carabineros presentados como culpables por la autoridades de dicho cuerpo policial. El asalto a una caja pagadora de Calama realizado por agentes del CNI que si bien fueron juzgados y condenados a muerte, nunca se hizo plena claridad de los hechos y circunstancias ocurridos.

Cuando esta compleja lacra se entroniza en una sociedad, como ha ocurrido en algunos países del continente, es casi imposible erradicarla, pues pasa a formar parte del funcionamiento mismo del sistema. La sociedad chilena no conoce experiencia de esta clase, y está presenciando, sin aquilatar en toda su trascendencia, el desarrollo de la delincuencia mayor y sus diferentes relaciones dentro del sistema, además que no está en condiciones de exigir al Gobierno que la combata y erradique. La dictadura, como en otras manifestaciones sociales, nada serio hace sobre el particular; por el contrario, a causa de su estilo de gobierno y por la necesidad de represión que éste requiere, está dando de hecho un amplio margen para la ex-

pansión de aquel tipo de delincuencia.

Este es otro factor de inseguridad que se suma a la incertidumbre económica y política que vive la población civil, con lo cual se está creando un clima de inseguridad general como nunca antes lo hubo. Admitir el desarrollo de la delincuencia mayor y de sus relaciones institucionales, y dar pábulo a un estado de inseguridad general, es otra de las grandes irresponsabilidades de la dictadura.

El Control Social

El control militar y policial que la dictadura ejerce sobre la sociedad civil es extraordinariamente amplio y enérgico. De hecho no hay actividad social, cultural, deportiva, económica o de otra índole que no esté controlada desde la cúpula de las instituciones que las realizan hasta la base misma. Es un control que no sólo vigila celosamente lo que esas instituciones hacen, sino que le dicta las orientaciones que deben seguir, entrometiéndose hasta en detalles específicos. Observa el quehacer y el comportamiento de la base de cualquier agrupación social, tratase de sindicatos, agrupaciones gremiales, colegios profesionales, juntas o centros de vecinos, clubes deportivos, entidades culturales, o religiosas, etc. Hasta las empresas económicas están controladas y vigiladas; sus negocios importantes, como ventas o compras de acciones, de propiedades, aperturas o construcciones de locales o establecimientos, u otras operaciones de esta índole, requieren de autorizaciones de los servicios de seguridad e información.

Se realiza un permanente control y una constante política de amedrentamiento a través de los municipios, cuyos alcaldes son militares o policías activos o en retiro, o civiles incondicionales de la dictadura que actúan con asesoramiento militar y policial. A través de ellos se controla directamente el funcionamiento de los establecimientos de educación pública de cada comuna desde el nivel parbulario hasta secundario y profesional medio; de los servicios de salud y de todas las actividades culturales, artísticas, deportivas, y otras realizadas por el vecindario. Se ejerce, por otro lado, un severo control de los sindicatos y federaciones, a los cuales se les sometió a leyes y procedimientos que los atomizó, además de designarles sus directores y restringirles la libertad para reunir asambleas. A los trabajadores se los controla en las empresas a través de los departamentos de relaciones industriales o de administración de personal, los cuales son dirigidos por militares y policías activos o en retiro directamente conecta-

dos con los servicios de inteligencia y de seguridad. Otro tanto ocurre en las empresas y oficinas públicas. En éstas, como en las empresas privadas, universidades y colegios, circulan listas de personas que se prohíbe contratar.

A las universidades se les controla y se les dicta la política a seguir desde la cúpula hasta el nivel de cátedra. Lo mismo que en las escuelas primarias, los liceos y planteles de enseñanza media de las comunas, la dirección de las universidades, de las facultades, escuelas e institutos de éstas, y las cátedras han sido, en la mayoría de los casos, entregadas a personas sin idoneidad. A esto se suma la falta de libertad para ejercer la docencia, para recomendar textos diferentes a los aprobados por la censura; para investigar, para discutir tesis u opiniones distintas a las admitidas por la dictadura. Las actividades del personal docente, administrativo y de los estudiantes son permanentes vigilados. Las universidades están saturadas de agentes informadores y provocadores directamente relacionados con los servicios de seguridad y policiales, con los grupos paramilitares y políticos incondicionales del régimen.

Las actividades civiles y las actividades religiosas, propiamente tales, de la Iglesia Católica se realizan bajo asidua observación y vigilancia. Agentes observadores e informadores, que a veces actúan como provocadores, asisten a misa, procesiones y otros actos religiosos. La Iglesia desarrolla sus actividades sometidas a una constante crítica de la dictadura y de El Mercurio, con el pretexto que sus acciones de ayuda social, de asistencia humanitaria, de denuncia de la situación de pobreza y de la desocupación significan entrometerse en política.

Todos los medios de comunicación social están sometidos al control y censura de las autoridades. Sólo pueden publicar o difundir las noticias y comentarios que éstas aceptan. Con ello se ha conseguido aislar al país del resto del mundo, y a Santiago de las provincias. La población chilena permanece desinformada de los principales acontecimientos y opiniones del resto del mundo y de su propio país, y la población de Santiago ignora lo que ocurre en provincias y viceversa. La censura intelectual se completa con las restricciones institucionales y económicas para publicar, comercializar y distribuir libros, revistas y otros medios escritos. A los elevados costos y precios se suman las prohibiciones. Por otro lado, las actividades artísticas y el cine están sometidos a similares condiciones; sus presentaciones, guiones o programas deben pasar previamente la censura.

Tan amplio control es ejercido a través, en primer lugar, de los servicios

centrales de información y seguridad, por los cuerpos policiales, y los servicios de inteligencia de cada arma, a lo cual se agregan los departamentos o secciones de los ministerios y de los organismos públicos encargados de estas funciones; le siguen, la acción que en este campo se le ha encomendado a los alcaldes y a otras autoridades. Cualquier autoridad militar o política está autorizada para ejercer control y censura de las actividades civiles. Para facilitar y hacer eficaz el control y la restricción de opiniones y actividades civiles, se introdujo el amedrentamiento y la llamada "autocensura". A través del primero se aplican rigurosos castigos ejemplares a los ciudadanos e instituciones que infringen las normas de la dictadura, con lo cual se consigue una incertidumbre tal que todo el mundo se autores-tringe o autocensura. En este aspecto el poder judicial ha sido extraordinariamente solidario con la dictadura.

El desenvolvimiento diario de la población civil, también es objeto de con-tínua observación y vigilancia. Son controlados e interferidos todos los medios de comunicación (correspondencia, comunicaciones telefónicas, telegráficas, etc.); vigilados los terminales y el movimiento de pasajeros de los medios de movilización urbanos e interurbanos, el movimiento de la masa de transeuntes en las calles céntricas de Santiago y de las principa-les ciudades, así como la concurrencia de los locales públicos como esta-dios, cines, teatros, locales de diversión, etc.

Este amplio y enérgico control que se ejerce sobre la sociedad civil es otro elemento de riesgo y de incertidumbre, que trasciende hasta los propios sectores de las fuerzas armadas y cuerpos policiales. Para ellos también ri-gen la vigilancia, el control y la autocensura, lo que les hace ser más rigurosos y enérgicos; en circunstancias que los efectos crecientes de la crisis económica y social les impone una actividad de vigilancia, de control y re-presión mayor, sin expectativas de que tales actividades y los riesgos per-sonales que conllevan aminoren o desaparezcan. Este es un factor de cre-ciente tensión hacia el interior de las Fuerzas Armadas y servicios policia-les y de seguridad, y hacia la sociedad civil.

El control y la represión de la vida civil que ejerce la dictadura han trans-formado a Chile en una caldera social a punto de estallar en un proceso de liberación del cual es difícil predecir su dirección.

La Crisis Económica y sus Expectativas

La economía ha caído en una crisis profunda, amplia y prolongada, que se

ha venido gestando a lo largo de los años de dictadura. Es profunda porque se están destruyendo las bases mismas de la propiedad de los medios de producción, sin que se advierta dentro del actual régimen alternativa alguna de parar esta situación.

La crisis va más allá de los procesos de producción y acumulación; corresponde, de facto, al estadio de una economía en liquidación. Tierras, maquinarias, instalaciones, herramientas, edificios, en fin, todo lo que hace a los establecimientos productores ya no se valorizan por lo que son capaces de producir como bienes de capital real; sino, como meros activos financieros en decadencia. Por otro lado, se destruyó el sistema de previsión social de la clase trabajadora y el sistema nacional de ahorro, además de deteriorarse profundamente el sistema bancario. Aún cuando la actual crisis mundial ha causado serios problemas en los países en desarrollo, ninguno de ellos ha llegado, como en el caso chileno, a destruir la seguridad social de sus trabajadores ni el sistema de ahorro privado.

Otra manifestación de la profundidad de la crisis es la inestabilidad de la propiedad del capital. La propiedad de la tierra ha venido siendo alterada desde la reforma agraria de Frei, y la propiedad industrial y de la banca, desde Allende. Durante la dictadura se retornó al sector privado la propiedad de estas últimas y prácticamente toda la tierra que había sometido a la reforma agraria. En parte esa devolución correspondió a los antiguos propietarios y en parte a nuevos propietarios, creándose con esta nueva repartición un nuevo contexto de la propiedad del capital y de relaciones sociales de producción, que requería un período relativamente prolongado de estabilidad de las reglas del juego económico para consolidarse. Pero las distintas fases que ha tenido la política y el modelo económico de la dictadura, así como la acción concentradora de los grupos económicos no han dado lugar a las condiciones para dicha maduración; por el contrario, han mantenido latente la inestabilidad de la propiedad, a lo que se agregó el endeudamiento masivo con garantía de los bienes productivos.

Al estallar en estos últimos años la crisis de insolvencia y de financiamiento, apareció con todas sus consecuencias, por un lado, la fluidez de la propiedad que pasa fácilmente de una mano a otra; y, por otro, su desvalorización como bienes económicos útiles para producir.

La apertura a las importaciones masivas e indiscriminadas, y la sobrevalorización de la moneda nacional (o baratura relativa del dólar) destruyeron buena parte de la industria y del agro nacionales, a lo cual se ha sumado en

estos últimos años la violenta caída de la demanda interna. Bajo estas circunstancias unos establecimientos productores han sido desmantelados y otros simplemente abandonados, transformando barrios y ciudades enteras en cementerios de industrias.

La imposibilidad del modelo económico de alcanzar una fase de estabilidad y madurez, junto con la crisis, han destruído, además, la capacidad empresarial. Durante la dictadura las motivaciones empresariales han estado centradas en realizar negocios rápidos y altamente lucrativos más que en hacer inversiones reales y consolidar sus empresas, dada la inseguridad e inestabilidad propia del modelo económico implantado. Sus propósitos básicos fueron aprovechar las volubles oportunidades que brindaba la política económica, en un momento en las exportaciones, en otro en las importaciones, ya sea acumulando stocks o liquidándolos, entrando en la especulación financiera o en arreglos de fusión o de división de las empresas, etc., etc. Ese comportamiento especulativo y de inestabilidad, sumado a las graves consecuencias que ha traído la crisis, han anulado el espíritu empresarial, sus motivaciones de acumulación y producción, de enfrentar riesgo, la imaginación para emprender negocios con horizontes. Lo que a los empresarios les interesa es salvar lo que les queda, y transformar en dinero nacional o en dólares todo lo que les sea posible; retirar capitales para ponerlos a salvo fuera y dentro del país; evitar de pagar tanto como las circunstancias se lo permitan, y presionar por conseguir pagos o para transferirle sus pasivos al Estado.

La crisis es amplia; se extiende por todos los sectores productivos: agropecuario, minero, industrial, de la construcción, de los transportes, de los servicios, etc. Por otro lado, la creciente anarquía de la política económica está afectando negativamente a las empresas del sector público, las cuales, además, están amenazadas de ser privatizadas o desmanteladas. Será prolongada porque en el contexto de la dictadura no hay fuerzas ni ideas para reconstruir e impulsar al sector empresarial y al sistema financiero; ni para crear un ambiente apropiado para incentivar y darle garantía al ahorro y a la inversión. Además, cualquier esfuerzo de rehabilitación de la economía deberá enfrentarse con la persistencia, ahora fortalecida, de la inflación; con la debilidad, ahora mayor, del comercio exterior y del financiamiento externo; y con las demandas sociales crecientes, que a pesar de toda la capacidad represiva aplicada por la dictadura no pueden ser acalladas.

La destrucción de fuentes productivas especialmente en el agro y en la in-

dustria, junto con el crecimiento de la dependencia externa en suministros esenciales para el consumo, la producción y la inversión, y el incremento tan extraordinario del endeudamiento externo de elevado costo y a corto plazo, han reforzado las tradicionales vertientes inflacionarias de la economía chilena. La escasez de producción y de divisas seguirán siendo los factores desencadenantes de la aceleración de la inflación, que nuevamente han empezado a crecer.

En materia de comercio exterior, la dictadura instrumentalizó lo que era fácil de hacer y que más favorecía a los intereses financieros y comerciales internos y externos de su protección. Abrió el país a las importaciones, las que crecieron más aceleradamente que las exportaciones. Estas últimas no fueron estimuladas de manera sostenida; por el contrario, la política de dólares relativamente baratos a base de un irrestricto endeudamiento de corto plazo, las sometió a continuos altibajos, contrarios a las más elementales condiciones de desarrollo del comercio exterior, por lo que han estado lejos de seguir el ritmo de expansión de las importaciones. La crisis internacional pronto dejó en evidencia la fragilidad de las llamadas exportaciones no tradicionales; además, ha mantenido bajos los precios del cobre que, con todo, continúa siendo el pilar del comercio exterior chileno. A futuro, se continuará luchando con la precariedad de las exportaciones tradicionales y con los declinantes mercados del cobre y de otros minerales tradicionales. Las nuevas tecnologías, demandantes de otra clase de minerales, están haciendo pasar al cobre, al hierro y a otros minerales tradicionales a la obsolescencia, de ahí la tendencia a la baja de sus precios o las dificultades para elevarse, y la debilidad de sus respectivas demandas.

Por otro lado, la destrucción de industrias, hacen que cualquier esfuerzo de rehabilitación de la economía incida en el crecimiento de las importaciones y que sea difícil desarrollar líneas industriales de exportación. Estas mismas dificultades, impiden que la economía nacional pueda verse favorecida por la recuperación de la demanda nacional cuando ésta se produzca; en verdad, la destrucción del aparato productivo que ha provocado la dictadura, ha dejado al país sin condiciones para acoplarse a la rehabilitación de la economía internacional.

Dentro de las demandas sociales, la más prioritaria y de mayor envergadura es la desocupación. El modelo de la dictadura terminó por destruir la pequeña industria y la artesanía, además de aplastar la economía campesina a base de pequeñas propiedades. Introdujo más intensamente de lo que ha-

bía ocurrido antes, la sustitución de mano de obra por equipos. Conseguir la reducción de la cesantía y crear oportunidades de empleo para los que buscan trabajo por primera vez, será una tarea ingente.

La Crisis de la Política Económica

La dictadura no está en condiciones políticas, psicológicas ni económicas para enfrentar los problemas señalados. Tratar de hacerlo, sería dar un giro de ciento ochenta grados, para lo cual no está preparada, no tiene las ideas necesarias ni los hombres apropiados, y psicológicamente está lejos de intentarlo.

La política económica de la dictadura se estructuró sobre la base de dos dimensiones: la del modelo de los "Chicagos boys", que ha sido la más conocida y discutida, y la otra aparentemente menos estructurada y por que ha tratado de pasarla inadvertida, que corresponde a la "línea de negocios" promovida al amparo de la primera. El llamado modelo de los "Chicago boys" fracasó y ha sido, de hecho, abandonado; la política que aún continúa es la "línea de los negocios", y que constituye el argumento de la dictadura para mantener el apoyo que aún le brindan los grupos económicos y la banca internacional.

La economía chilena ha sido golpeada, como todas las economías del Tercer Mundo, por la crisis internacional; pero este no es el único origen de la crisis nacional, ha sido sólo un factor más. Aún sin la depresión mundial, la crisis chilena habría estallado igual a causa de las fallas básicas del llamado modelo económico que instrumentalizó.

Este se intento basarlo en la expansión de las exportaciones, especialmente de las no tradicionales, sin reparar en el alto contenido importado con que funciona la economía chilena y que en muchos aspectos es crítico. Chile es deficitario en petróleo, alimentos, insumos industriales y para el agro, en bienes de capital y repuestos, etc., que debe suplir con importaciones, a lo cual la política de la dictadura le agregó un fuerte ingrediente de crédito caro y de corto plazo que vino a completar el capital de trabajo de las empresas. Por estos contenidos y costos importados, cada unidad de exportación conlleva una elevada proporción de reexportaciones, correspondiendo a bienes y servicios nacionales propiamente tales un modesto porcentaje. Por esta condición estructural el modelo requeriría un fuerte y sostenido crecimiento de las exportaciones; al no darse tal condición falló una de sus

bases fundamentales.

Otro factor generador de crisis que contuvo la política de la dictadura, fue el hecho que la tasa de interés y del costo del crédito resultara mayor que la tasa de rentabilidad de los procesos productivos. Ninguna economía mixta o de mercado subdesarrollada, e incluso, desarrollada, resiste tal incongruencia por un período relativamente prolongado sin caer en crisis. Este factor ha sido otra de las mayores aberraciones del manejo de la política económica.

A estas dos causales de crisis, se sumó la dirección que tomó el empleo del crédito externo y la inversión. La dictadura indujo a un ingente y gravoso endeudamiento externo de corto y mediano plazo con la banca internacional, cuyo empleo se concentró en edificios urbanos e inversiones escasamente productivas y generadoras de divisas; otra fracción se revirtió al exterior como inversiones financieras de los grupos económicos y de particulares, y lo restante se dedicó a financiar el déficit de la balanza de pago en cuenta corriente. Además se instrumentalizaron políticas absurdas como la de fomentar la expansión del parque automotor en circunstancias que el país no tiene petróleo suficiente para cubrir sus necesidades, o la de incentivar el consumismo sin tomar en cuenta lo reducida que históricamente ha sido la tasa de ahorro.

Si bien con estas políticas se estimulaba la coyuntura, por otro lado se socavaba la base misma del crecimiento económico. Bajo estas condiciones y por el carácter mismo de la dictadura, su política no fue capaz de atraer inversiones extranjeras en las magnitudes que esperaba; los capitales internacionales prefirieron operar como crédito, en vez de entrar como inversiones permanentes; pues, aquella modalidad les resultaba menos riesgosa y más rentable.

El modelo resultó altamente derrochador e ineficaz en sus aspectos fundamentales; fue, sin embargo, muy efectivo en lo tocante a reducir el costo de la mano de obra. Mediante una enérgica represión a los sindicatos y a los líderes democráticos de los trabajadores, y de la implantación de una legislación descaradamente favorable a los patronos, se ha logrado bajar dicho costo hasta el extremo de que las empresas reconocen que lo más barato es la mano de obra. A ello se sumó la transferencia de los fondos previsionales al sistema financiero privado. También ha funcionado la libertad de precios y en buena medida el autofinanciamiento de las empresas y servicios públicos sobre la base de la enorme carestía que ha procado

aquel difundido empobrecimiento comentado en puntos anteriores. Asimismo, se ha hecho operar una política de equilibrio fiscal mediante la reducción del gasto más que del aumento de los ingresos tributarios, y una política monetaria de mercado libre que sirvió más a la especulación y a doar de liquidez a los grupos económicos, que para apoyar la producción y la inversión. Todas estas políticas internas han tenido dos bases fundamentales: la represión y el cogobierno que de hecho se ha practicado con los grupos económicos, los que han sido los verdaderos mentores y beneficiarios directos de la legislación y medidas económicas aplicadas por la dictadura.

En este contexto, el modelo de los "Chicago boys", fue de hecho, una gran simulación, una verdadera cortina de humo tras la cual se ha practicado la otra dimensión de la política, la "línea de los negocios". Es extraordinariamente significativo que con toda la ciencia económica que se decía que aplicaban los discípulos de la escuela de Chicago, y el asesoramiento americano de los principales exponentes de esa escuela, no se hubieran percibido y corregido las fallas tan evidentes que tuvo desde el inicio de su aplicación. La razón de tal deficiencia radica en la fuerza que alcanzó la "línea de los negocios. Esta consiste en armar paquetes de operaciones comerciales y financieros que favorecen a los grupos económicos y a empresas allegadas a la dictadura, en muchos de los cuales participan miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales. A esta línea respondió buena parte de los giros que ha tenido la política económica y financiera.

Ejemplos de estas operaciones han sido, para empezar, la distribución de tierras, acciones bancarias y empresas industriales que se privatizaron; la administración selectiva del crédito en que mientras a unas empresas se les ahogaba hasta llevarlas a su liquidación o quiebra, a otras se les saturaba de liquidez con la cual adquirirían a precios bajos los stocks y los activos de las primeras; la apertura de las importaciones, especialmente en cuanto a automóviles, televisores y otros bienes que se prestaron para hacer negocios en grandes lotes; operaciones en el campo de las exportaciones, como el caso de maderas, productos del mar, y minerales en los cuales negociaron concesiones y permisos de explotación; la privatización de los fondos de la seguridad social; la mayor participación que se le dió a la empresa privada para explotar las actividades de la salud y de la educación, como industrias lucrativas más que como servicios sociales; la fusión de empresas, por un lado; y, la separación de las empresas industriales de los bancos, cuando éstos entraron en dificultades, etc. Más recientemente, se ubican en esta línea la transferencia de los pasivos bancarios al estado; los

arreglos de bancos con dificultades; la quiebra de financiamiento que estafaron descaradamente a sus depositantes; el financiamiento instrumentalizado para permitir la venta de 14 mil apartamentos; y, entre otros, hasta la forma como se procesó a efectuar la devaluación. Estos son sólo unos cuantos casos ilustrativos de la política de los negocios, la que por su amplia aplicación ha llegado a ser percibida por el grueso de la población, lo que ha incidido en la pérdida de credibilidad del régimen.

Dentro de dicha línea aún quedan paquetes de operaciones por realizar que son extraordinariamente atractivos para los grupos económicos y para los protegidos por la dictadura que se aprontan a participar en ellos. Resta la privatización de empresas públicas o de bienes de éstas, que ya están en curso; la renegociación y transferencia de la deuda privada externa al Estado así como de nuevos paquetes de pasivos internos de los grandes deudores que se está diligentemente preparando para que sea tomada por el Estado; la renegociación de la deuda externa pública y de obtención de fuertes sumas de crédito, operaciones que se están negociando con la banca internacional a base de altos recargos de intereses, de comisiones y de la hipoteca de las reservas en oro. En esta línea de política aún restan la sobrevaluación de la moneda (precio del dólar relativamente barato) hasta agotar las reservas del Banco Central, lo que facilita el retiro de capitales y el servicio de la deuda privada. Otra opción que se ha mantenido siempre latente, es la privatización del cobre y de la siderurgia de Huachipato.

En función de las posibilidades de negocios que aún quedan por hacerse, la banca internacional está dispuesta a tratar con la dictadura y a mantenerle su apoyo. Otro tanto es la disposición de los grupos económicos internos. Esta clase de apoyo, junto a otros factores políticos internos y al respaldo del Gobierno Norteamericano, es el que ha impedido que se haya desatado abiertamente la crisis política de la dictadura, en momentos tan álgidos como aquel de la quiebra y estafa de las financieras.

Otra característica que ha tenido la política de la dictadura ha sido, como se sabe, su gran indiferencia por los aspectos sociales. Su oposición y justificación en este campo fue que la competencia o el juego del mercado permitía resolver el problema del ingreso, del empleo y del bienestar de la población, sin necesidad que hubiera una significativa intervención estatal; esta se ha reservado sólo para algunas cuestiones muy específicas y se ha ejercido de manera marginal. Después que pasó el período más bien corto de crecimiento económico y que se acrecentó la cesantía y el empobrecimiento, quedó en evidencia la falacia de aquella justificación, pero sin que

el carácter de indiferencia social de la política haya cambiado, con lo cual esa condición se ha transformado en una verdadera crueldad social de la dictadura, que resulta mucho más violenta cuando se considera que en el Chile democrático, la política económica siempre tuvo un alto contenido social.

Un cuarto elemento de la política económica seguida ha sido su justificación mediante el empleo exhaustivo de la técnica del embuste aplicada tanto en el interior como en el exterior. Esta técnica ha ido desde una amplia difusión y propaganda del llamado modelo hasta la ocultación y manipuleo de las estadísticas internacionales. Además de la propaganda pagada, en este aspecto se ha contado con el apoyo casi irrestricto del Fondo Monetario Internacional y del Gobierno Norteamericano y del conservadorismo inglés, además de personeros de gobiernos europeos. Aprovechando la censura a otra opinión contraria, la dictadura ha podido sostener la tesis de la minirecesión cuando ya la crisis era evidente; declarar de que no se iba a devaluar cuando ya la decisión de hacerla se había tomado; negar la posibilidad de renegociar la deuda externa en circunstancias que ya estaban haciendo contactos para ello; sostener que las reservas internacionales eran fuertes cuando entraban en declinación. Esta actitud le granjeó a la dictadura una extraordinaria credibilidad entre el sector empresarial, que al producirse la devaluación y la quiebra de las financieras y bancos, se perdió. Tal pérdida de confianza del sector empresarial ha sido uno de los mayores golpes que ha recibido su política y que ha precipitado la crisis en que se desenvuelve.

Las Expectativas de la Política Económica

Las expectativas de la política económica de la dictadura son negras; el argumento que la crisis ha tocado fondo y que ya viene la recuperación, es parte de los embustes empleados para ocultar el vacío de ideas y de iniciativas que se ha producido en la conducción del Gobierno. También sirve para ganar tiempo y para justificar las operaciones programadas siguiendo la "línea de los negocios", que por cierto no se dejará de mano. Tampoco se abandonará la crueldad social; por el contrario, se hará aún más dura.

En el contexto de la crisis nacional, las expectativas de la política económica son su anarquización creciente, especialmente en el campo financiero, hundiendo las actividades productivas en un ambiente de incertidumbre, de especulación y de desestímulo. Los problemas más inmediatos y de consecuencia imprevisibles que están en desarrollo son la pérdida de las re-

servas del Banco Central, la escasez de alimentos, el crecimiento de la inflación y un desorden progresivo en el financiamiento del presupuesto y en la emisión monetaria.

Las reservas del Banco Central están expuestas a continuar bajando, no obstante el apoyo que puede recibirse a través del acuerdo de stand by del Fondo Monetario Internacional, de los créditos de apoyo de los bancos extranjeros y de la renegociación de la deuda. La hipoteca del oro y las exigencias impuestas por los bancos internacionales revelan la tremenda incertidumbre del sistema financiero internacional sobre Chile. Las operaciones que se están negociando están destinadas a permitir a los acreedores internacionales recuperar sus créditos de Chile más que a fortalecer las reservas y a estimular la recuperación. De manera que sólo significarán una operación de ingreso y salida casi inmediata de recursos. Además, buena parte de las reservas existentes están garantizando líneas de crédito, expuestas a suspenderse de un momento a otro, y a transacciones reservadas. Estas condiciones pueden en cualquier momento precipitar violentas crisis de liquidez externa, especialmente si se demoran, como está ocurriendo, la renegociación de la deuda y la consecución de créditos adicionales.

Para evitar tales crisis de reservas o a causa de las mismas, se tendrá que recurrir forzosamente a devaluaciones que impulsarán la inflación hacia una espiral incontrolable. Esta ya ha entrado en aceleración, no obstante la depresión y el menor ingreso de la población, por la insuficiente producción agropecuaria y la escasez, consiguiente, de alimentos, a lo cual se agrega la especulación desenfrenada que están desatando los grupos económicos.

Por otro lado, se ha perdido el control que se tenía sobre el presupuesto del estado, el que ha caído en un déficit creciente, que inducirá a una utilización intensa del crédito del Banco Central y a retrasos en los pagos. La dictadura ya no está en condiciones de aplicar nuevos impuestos ni de controlar los gastos, especialmente de remuneraciones y de operación de las Fuerzas Armadas y Policiales. La emisión monetaria, además de las presiones para financiar el presupuesto, está expuesta a las presiones de los grupos económicos por conseguir liquidez y a las que provengan de las empresas que por falta de demanda o por problemas financieros se vean inducidas a despidos masivos de personal. En las difíciles condiciones por las que atraviesa la dictadura, es probable que trate de evitar problemas de esa índole recurriendo al crédito bancario apoyado en la emisión del Banco Central.

Medidas de este tipo le crearán conflictos con el Fondo Monetario Interna-

cional, no obstante el casi irrestricto apoyo de éste a la dictadura, y provocará enfrentamientos entre las autoridades responsables de la conducción económica, y entre éstas y los altos mandos político—militares. Las fuerzas que conducen a tal cuadro anarquizante ya se han puesto en movimiento, desbaratando cualquier opción para reestructurar un nuevo esquema de política económica.

Situación sin Salida

El amplio espectro de la crisis nacional, con sus manifestaciones tan dramáticas en el plano familiar; el rígido control social ejercido y la inseguridad y cisma social que se ha provocado, junto con la crisis económica y de la política seguida en ese campo, ha llevado a la dictadura a un callejón sin salida, en que cualquier debilitamiento del rigor con que ha sido ejercida le parece altamente riesgoso.

Al carácter extraordinariamente autoritario y rígido de la dictadura, se suma la conducción unipersonal y centralizada del Gobierno, del cual los altos mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales fueron y admitieron ser marginados, quedando en la cómoda posición de observadores incondicionales. Estas características del Gobierno militar, más la eliminación en los cuerpos armados de todo asomo de disconformidad, crearon alrededor de la conducción del Gobierno un apoyo irrestricto. Ante las dificultades que éste ha venido enfrentando y el aislamiento en que han caído las Fuerzas Armadas y Policiales dicho apoyo se ha hecho mayor, fortaleciéndose el espíritu de cuerpo de las mismas. Esto ha facilitado, a su vez, el robustecimiento de la verticalidad del mando.

La actitud más cómoda y que mejor responde a la lealtad de los mandos de las Fuerzas Armadas y Policiales hacia el Gobierno, es la de no innovar en la política general de la dictadura. Cualquier modificación que provenga de aquellos mandos, además de desatar serios conflictos en el interior de las Fuerzas Armadas y Policiales, y de éstos con el Gobierno, les compromete a sostener nuevas políticas de las que no tendrían suficiente control. Además, en dichos mandos no es mucha la lucidez para crear políticas alternativas, debido a su propia marginación de la conducción nacional.

Estas características, conformadas en el curso de los años de dictadura, aparecen ahora como importantes factores paralizantes de la acción política y conductora de las Fuerzas Armadas y Policiales para encontrar solu-

ciones a la crisis nacional y a la del Gobierno. Han caído así en un inmovilismo, en que sólo se profundiza su autodefensa frente a las demandas y actitudes de la sociedad civil.

El autoritarismo del Gobierno lo hace reaccionar frente a la crisis y a la población civil con mayor energía, enfatizando su voluntarismo tanto en sus declaraciones como en los hechos. Siendo el momento de revisar posiciones y de tornarse flexible, el carácter unipersonal y rígido del Gobierno, se lo impide hacerlo, y cuando trata de avanzar alguna concesión, actúa mal, creando nuevos problemas o contradicciones. Así se está desgastando progresivamente la capacidad política para conducir el Gobierno.

La Escalada Represiva

Las consecuencias y riesgos que para la sociedad civil se deriva de la crisis en que se encuentran las Fuerzas Armadas y Policiales y el Gobierno son extraordinariamente graves; pues, la respuesta más inmediata de la dictadura es como hasta ahora lo ha demostrado, la represión.

La dictadura ha demostrado poseer condiciones básicas para reprimir a la sociedad civil. Una es la capacidad y eficacia física para hacerlo, es decir, la organización y equipamiento que se dispone para realizar amplios, rápidos y violentos operativos en poblaciones populares, industrias, universidades, centros mineros, etc. y para mantener bajo control a Santiago y a las ciudades de provincia.

La otra condición es moral, y por lo mismo es la más grave. El Gobierno está psicológicamente preparado y predispuesto a ordenar acciones represivas, y los cuerpos armados y policiales dispuestos a ejecutarlas sin contemplaciones, trátase de reprimir a amplios sectores de la población civil o de realizar acciones específicas contra personas o grupos selectos. Esta condición es, por cierto, la más detestable; pero hasta ahora no hay evidencia alguna que haga pensar que se haya atenuado o desaparecido la proclividad represiva demostrada al instalarse la dictadura. Por el contrario, ha sido permanente el perfeccionamiento de los medios de represión y el entrenamiento físico y psicológico del personal para aplicarlos.

Desde la preparación del golpe de estado de 1973, la concepción con que de hecho se ha operado es considerar a la población civil como un enemigo de guerra, haciendo actuar a las Fuerzas Armadas y Policiales en conse-

cuencia. Al establecerse la dictadura, al país se lo ha considerado como territorio ocupado y a la población civil como enemigo vencido, sujeto a acciones punitivas. Para ello, fuera de los argumentos políticos contra el Gobierno de la Unidad Popular, se inventó el conocido "Plan Z", que se utilizó como pretexto para realizar la masiva represión de los meses siguientes al golpe, para desunir a la población civil y para incentivar la práctica de la delación.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, la situación sin salida en que se encuentra la dictadura y el estado de nerviosismo reinante, es posible que se produzcan crímenes contra dirigentes políticos, gremiales o personas civiles importantes y que la represión contra la sociedad civil se lleve a una escalada mucho más masiva de la que ha venido practicando. Esto implicaría un mayor número de allanamientos, de detenciones, de fusilamientos, deportaciones o relegaciones, masacres en poblaciones populares o en industrias o establecimientos mineros. Dicha escalada llevaría a una censura absoluta de los medios informativos; a la anulación y desconocimiento del poder judicial y una mayor persecución contra la Iglesia y contra todos los grupos defensores de los derechos humanos. Para justificar tal represión, se haría uso de cualquier pretexto, tal como ha ocurrido en el pasado, como otro "Plan Z" o la conocida excusa de los complots.

La Reacción de la Sociedad Civil

A pesar del latente riesgo de la escalada represiva, la población civil empezó en el primer semestre de 1983 a manifestarse masivamente contra la dictadura, respondiendo a una iniciativa lanzada por los sindicatos encabezada por la Conferederación de Trabajadores del Cobre. Este es un movimiento extraordinario trascendente que, por las condiciones sociales prevalecientes, tiene expectativas de desarrollarse hasta hacer caer la dictadura. Esta última consecuencia dependerá de la inteligencia política con que actúe el civilismo.

A lo largo de su historia republicana, la población chilena logró crear un sistema democrático progresista basado en la búsqueda de soluciones a los problemas sociales y nacionales sin recurrir a la violencia. Ha sido la dictadura la violenta; la sociedad civil siempre confió en el funcionamiento de los poderes públicos y en la seriedad y constitucionalidad de las Fuerzas Armadas y Policiales, y nunca intuyó el violentismo que éstas han sido capaces de ejercer en los últimos diez años. No obstante la ideologización y

politización de amplios estratos sociales y de la dinámica actividad gremial, en Chile no se desarrollaron movimientos guerrilleros como en otros países de América Latina; ha sido, sí, un país de luchas y reivindicaciones sociales tanto de las clases populares como medias. Chile ha sido un país de grandes movimientos sociales, de huelgas, de desfiles y concentraciones masivas; de activas organizaciones de trabajadores; de movimientos campesinos, de pobladores, de estudiantes, de profesionales; de grupos capaces de hacer grandes sacrificios físicos y morales para conseguir sus reivindicaciones; pero siempre con alto sentido cívico y sin desorden social. Por cierto, esas manifestaciones provocaban tensiones sociales y políticas, y estremecían las estructuras sociales, económicas y políticas acelerando su evolución, pero sin llegar al violentismo.

Estas cualidades han emergido nuevamente. La sociedad civil saturada de la violencia y crueldad de la dictadura, de su política embaucadora, del sometimiento y presión psicológica de que es objeto, ha empezado a reaccionar de una manera pacífica pero activa que, por cierto, es infinitamente más fuerte que la capacidad represiva de la dictadura.

La posición estratégica en la producción le ha permitido al sindicalismo, salvando las restricciones y la atomización que se le ha impuesto, levantarse como el primer exponente social que de manera organizada asume y dirige una activa oposición a la dictadura. Para ello, las federaciones democráticas de trabajadores han logrado, formar —por encima de sus intereses más inmediatos, de posiciones políticas e ideológicas— un consenso mínimo de oposición. En esto los trabajadores organizados han actuado más pronto y más efectivamente que los partidos políticos transformándose en el detonante de la protesta masiva. Con su actitud pueden estimular el movimiento social hasta derrotar la dictadura; pero dado el carácter circunscrito del gremialismo en la vida nacional, las confederaciones de trabajadores, por sí solas no pueden sentar las bases de un gobierno democrático. En ello tienen, naturalmente, que intervenir los partidos.

Grande es, sin dudas, la responsabilidad de los partidos políticos que están por la vuelta a la Democracia. Tienen que crear una opción factible que junto con derrotar la dictadura, induzca a un régimen político y social de derecho, y haga regresar a las Fuerzas Armadas y Policiales a sus funciones profesionales reconociendo y respetando el poder civil institucionalizado conforme al nuevo régimen constitucional. Les espera, por tanto, un período duro de enfrentamiento con la dictadura junto a un activo trabajo para definir un procedimiento político para instalar y organizar

el gobierno que sustituya a ésta, y para definir un programa económico y social mínimo para dicho gobierno. Es impredecible la forma y dinámica que tomará el proceso de enfrentamiento con la dictadura y de sustitución de la misma, pero ello no opta para que los partidos se empeñen en profundizar y ampliar su consenso sobre las tan trascendentales cuestiones nacionales que sobrevienen.

La claridad con que los partidos actúen en el contexto social y que traten aquellas cuestiones, el desprendimiento de intereses inmediatos que demuestren ante la necesidad de formar un gran consenso nacional, y la efectividad de su trabajo en esa dirección, inspirarán a la sociedad civil para perseverar en su lucha y para confiar nuevamente en la Democracia. En otras palabras, la responsabilidad de los partidos políticos es evitar que la sociedad civil se frustre o que se vea confundida en su lucha contra la dictadura. Esta no sólo está respondiendo con la represión al civilismo; sino, también, con opciones políticas, como la de insistir en la formación de un movimiento cívico nacional con organización y caracteres de partido. Además, aparecerán las iniciativas políticas que los grupos económicos, interesados en demorar y transar la caída de la dictadura, introducirán en la sociedad civil. Otras tantas alternativas provendrán del exterior, especialmente de los gobiernos Norteamericanos e Inglés.

Estas iniciativas de la dictadura y de sus adherentes, así como la presencia de los grupos económicos y de sectores de la extrema derecha y golpistas que sobrevivirán al derrumbe de aquella, plantean cuestiones fundamentales a los partidos democráticos, especialmente a los más ligados y representantes de las clases popular y media, frente a las cuales deberán, quiérase o no, asumir, posiciones y hacer suficiente claridad ante el pueblo.

Reconociendo que la caída de la dictadura es el objetivo central de momento político, lo deseable, sin embargo, es que ello se produzca como resultado de un proceso social masivo, ampliamente participativo y de extraordinaria madurez cívica y política, que siga consustanciando la vida política nacional y la construcción y conducción del régimen que sucederá al actual. Un proceso con tales características salvaguardaría al país y al pueblo de que los grupos económicos, de extrema derecha y golpistas continuarán, disfrazándose de civilistas y democráticos, teniendo en la práctica poder suficiente para influir decisivamente las nuevas instituciones políticas nacionales en su favor.

Sería lamentable, por otro lado, que la caída de la dictadura fuera el resul-

tado de arrglos entre la cúspide de los partidos y sectores de aquella he-
chos a espaldas del pueblo. Una marginación de éste crearía desde el ini-
cio del nuevo régimen un estilo político voluntarista, un ambiente de com-
ponendas entre personalidades y directivas políticas que distanciarían al
sistema político de las motivaciones y problemas del pueblo. Condiciones
como esas provocarían tal cúmulo de tensiones y contradicciones, como ha
ocurrido en otras experiencias del continente, que el nuevo régimen y go-
bierno se desenvolverían en permanente crisis, dando posibilidades a la
vuelta del autoritarismo sea que los ejercieran los militares, los civiles o una
combinación de ambos.

A propósito de la viabilidad del nuevo régimen y de los problemas que ten-
drá que enfrentar el gobierno, es necesario destacar que las dificultades fi-
nancieras y económicas que le esperan son de tal magnitud y complejidad
que no podrán ser abordadas sin participación popular en la definición e
instrumentalización de las políticas a seguir. Entre los políticos convencio-
nales y de viejo cuño, como también ha ocurrido en la dictadura, existe la
proclividad a creer que siempre hay soluciones casi milagrosas para los pro-
blemas económicos. Suponen que estos los resuelve la inversión extranjera
o el crédito externo y que con una u otra ley de concesiones, fluirán al
país recursos en cantidades suficientes; o creen en la ayuda internacional,
la misma que se consigue con alguna gestión de habilidad diplomática; o
confían en una pronta mejoría del precio y la producción de cobre; o su-
ponen que una u otra innovación en alguna ley o política va a salvar la si-
tuación. En verdad, las condiciones de la economía y de las finanzas chile-
nas y del mundo no están para simplismos de esta clase; sería una lástima
que en el nuevo régimen se continuara con ese tipo de ideas; sí así ocurrie-
ra, las experiencias históricas de nada habrían valido.

Los cambios que sobrevendrán y las políticas a seguir serán, por la situa-
ción que se heredará, complicados y tendrán que ir al fondo estructural de
los problemas nacionales. Habrá, por cierto, que derogar la actual consti-
tución y formular y aprobar una nueva; habrá que derogar, por otro lado,
leyes, normas o instituciones establecidas por la dictadura; otras, sin em-
bargo, serán factibles de reformas o adaptaciones al nuevo régimen demo-
crático; unas terceras serán objeto de revisión y de reorientación en su es-
píritu y aplicación, etc. Todo lo que se se haga en este proceso de trans-
formaciones tendrá que orientarse, por una parte, a crear un régimen polí-
tico e institucional no sólo representativo, sino ampliamente participativo,
y que, por otra, admita la reestructuración de la economía, de los servi-
cios sociales y del sector público; que impida la concentración del poder

económico, de la propiedad y del ingreso, al mismo tiempo que facilite una forma de incursión del país en el nuevo contexto de relaciones económicas y políticas internacionales que está surgiendo con motivo de la actual crisis mundial.

El horizonte y el protagonista fundamental de esta ingente de reconstrucción nacional es el pueblo; una dirigencia política ni por muy ilustrada y bien intencionada que sea, no podrá intentarla sin contar con las mayorías nacionales como árbitro de los conflictos que la misma suscitará; sin aprovechar la capacidad creadora del pueblo para organizarse y trabajar en torno de soluciones de problemas específicos en que la iniciativa popular es factible y sin la presencia de representantes de los más amplios estratos de la población en la dirección de los organismos de base y nacionales. Las posibilidades de conseguir tales condiciones depende de como se identifique el papel de las directivas políticas con las motivaciones de las bases de los partidos, y de como éstos realicen su función de concientización social y de orientación política e ideológica entre la población. Por cierto que esta función de los partidos requiere una gran comprensión de los límites y del valor histórico de la Democracia; en ésta el consenso social—político, la tolerancia ideológica y lo cristalino de las reglas del juego político resultan fundamentales, especialmente en las primeras fases del nuevo régimen.

Otra de las grandes cuestiones nacionales que quedan por resolver, es cómo se puede aliviar la agobiante situación social y económica en que se debate la sociedad civil, en particular los sectores populares. Este es un punto muy importante que desde ya conviene pensar e instrumentalizar; pues, el derrumbe de la dictadura y la instalación de un nuevo tipo de gobierno no traerán por sí sólo alguna mejoría económica y social; por el contrario, la anarquización de la política económica y la irresponsabilidad con que se están manejando los asuntos públicos, dejarán una situación financiera y económica extremadamente agravada. Es necesario, entonces, consustanciar la actual protesta social masiva, con un amplio contenido de reivindicaciones sociales y económicas orientadas a aliviar un tanto o en algunos aspectos específicos la situación del pueblo.

Las Reivindicaciones Inmediatas

Conjuntamente con la oposición a la dictadura, plantear esta clase de reivindicaciones es una forma de vincular los problemas más inmediatos de la

población civil con la caída de la dictadura y emergencia del Gobierno que la sustituya; es una manera de crear conciencia sobre dichos problemas y que el programa económico y social que se estructure para el nuevo gobierno tenga presente la situación del pueblo y que se defina en función de la misma.

El riesgo que el pueblo corre es que entre los esfuerzos que se tendrán que hacer para resolver los problemas financieros y económicos de orden nacional que dejará la dictadura y la emergencia política que provocará su caída y sustitución, si bien se conquiste la libertad política y se retome el camino de democracia, no se atiendan las demandas populares. Si ello ocurriera, se provocaría una tensión social y política que debilitaría la identidad entre el régimen democrático y pueblo, alimentando la inestabilidad política, como ha ocurrido en otros países del continente que en los últimos años han salido de dictaduras y entrado en regímenes democráticos. Por lo dicho, llevar adelante una política de planteamiento y lucha por reivindicaciones sociales no podría aceptarse como una maniobra de distracción del objetivo político de terminar con la dictadura, sino como una manera de fortalecer la lucha civil y de irle fijando orientaciones al nuevo gobierno y al régimen político e institucional que viene.

En estos años de dictadura, acallado y todo como ha estado el pueblo, en cada oportunidad que las organizaciones populares han tenido, han ejercido su derecho a plantear problemas y demandar soluciones. Ahora se trata de incentivar y darle organización a escala de barrio o población, de comuna, de ciudad, de región y nacional al planteamiento de problemas y demanda de soluciones y de proposiciones de medidas concretas que alivien la situación familiar, comunitaria y de amplios conjuntos sociales. Estas reivindicaciones pueden ir desde los problemas más generales, como el desempleo, los bajos salarios, el costo de la educación, los precios de los medicamentos, del transporte y de los suministros de gas, energía, agua, etc., hasta los problemas más específicos que existen a nivel de barrios o poblaciones o comunas. Por cierto caben en esta línea reivindicativa cuestiones más amplias de orden institucional y política que la sociedad civil exija desde ya cambios relacionados, por ejemplo, con la administración de justicia, de los municipios, de las universidades, de las relaciones internacionales, etc., además, por cierto, de la libertad y del respeto a los derechos humanos.

La cobertura de los problemas y medidas planteados convendría que fuera tan amplia que abarque o que cope todas las políticas públicas, de manera

que la dictadura no tenga opciones de levantar políticas alternativas, y que cada problema que pretenda resolver o medida que trate de tomar, responda a las reivindicaciones populares. Así se conformaría y robustecería la capacidad de presión del pueblo, al mismo tiempo que desmoralizaría a las autoridades de la dictadura, cuya soberbia y crueldad social no ha tenido precedente. La dictadura no se va a rehabilitar ni se va a afirmar con las concesiones que haga a las demandas sociales. Para empezar, no dispone de recursos financieros ni organizativos ni condiciones políticas para atender la mayor parte de las reivindicaciones factibles de plantearse; éstas demostrarían su incapacidad para realizar políticas en favor del pueblo e introduciría un nuevo factor de enfrentamiento en los mandos administrativos, políticos y militares de la dictadura.

En esta línea reivindicativa, tienen amplia cabida los profesionales, técnicos y estudiantes que están por el retorno a la democracia. A través de sus sindicatos, colegios, centros, u otras organizaciones en que se afilian pueden colaborar con las organizaciones sociales de base y nacionales a elaborar el planteamiento de problemas, de soluciones y de medidas concretas; otro tanto, puede decirse en relación de las organizaciones parapolíticas que han surgido en estos últimos años.

La actual generación del civilismo chileno no tiene mayor experiencia sobre lo que implica un retorno a la Democracia. Como se ha visto en los países del continente, esta es una tarea ardua y compleja; pues, de hecho hay que reorganizar casi todos los aspectos de la vida nacional en un clima de grandes incertidumbres y presiones. En los últimos países que han retornado al régimen democrático, se han constituido diversas comisiones especializadas en los aspectos más urgentes a resolver para darle viabilidad institucional y política al nuevo régimen. Tomando en cuenta esta experiencia y como una forma de estructurar con más fuerza la política de reivindicaciones inmediatas, podría formarse una instancia que organice y dirija aquella política a nivel comunal, provincial, regional y nacional, y que conjuntamente con las demás instituciones representativas promueva la satisfacción de dichas reivindicaciones.